

Panorama de riesgos desde noviembre de 2021 a abril de 2022

RESUMEN

Este reporte de riesgos busca informar a los responsables de la toma de decisiones humanitarias y facilitar la planificación de la respuesta mediante un análisis de:

- La posible evolución de las dinámicas de la crisis en Colombia durante los próximos seis meses (noviembre de 2021 a abril de 2022)
- Los factores que pueden provocar cambios en la situación humanitaria
- Las necesidades humanitarias que pueden surgir en caso de la materialización de los riesgos

TABLA DE CONTENIDOS

PANORAMA DE LA SITUACIÓN.....	2
RIESGO 1.....	4
RIESGO 2.....	6
RIESGO 3.....	7
RIESGO 4.....	8
RIESGO 5.....	10
FACTORES AGRAVIANTES.....	11
VACÍOS DE INFORMACIÓN.....	11

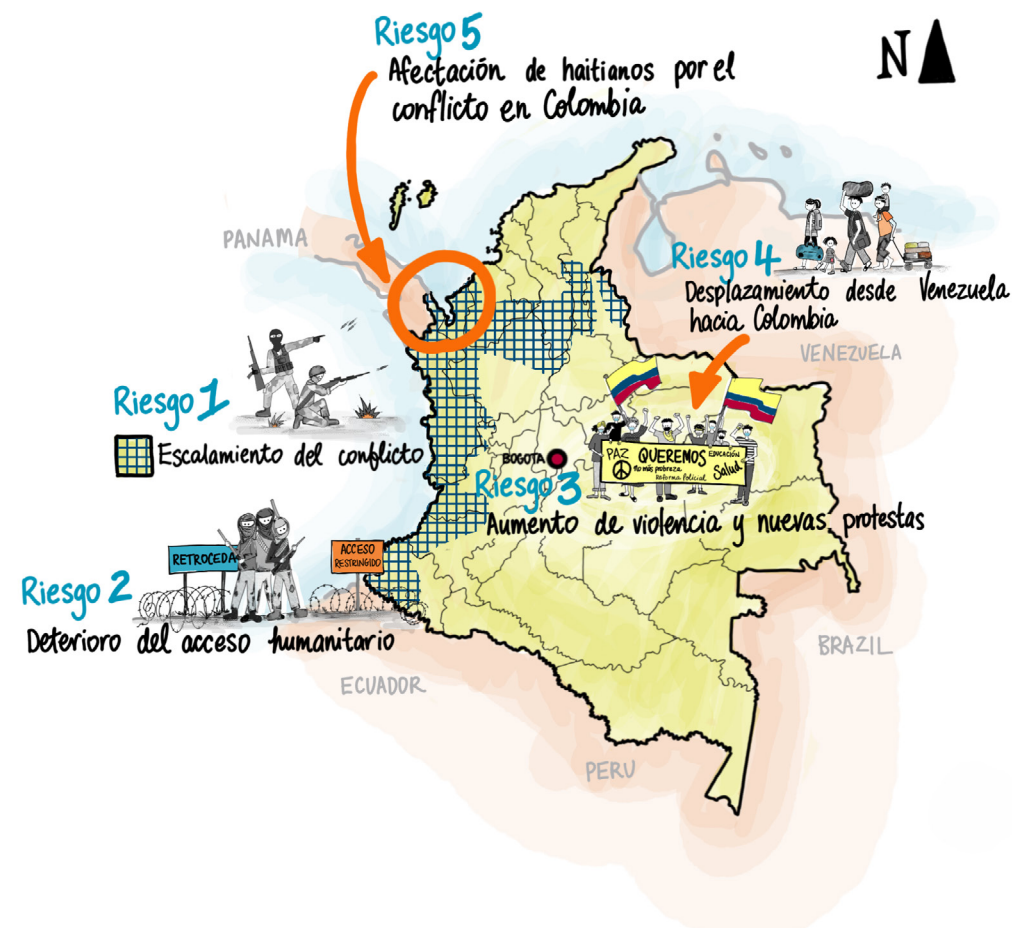


Ilustración por Sandie Walton-Ellery
Vea mapa completo en la página 12.

METODOLOGÍA

El análisis de riesgos es el proceso de identificar y desglosar los posibles acontecimientos futuros que pueden afectar a las personas, los bienes y el medio ambiente. El análisis de riesgos no es un pronóstico y no pretende predecir el futuro inmediato, sino que busca identificar posibles futuros con importantes consecuencias humanitarias negativas.

El análisis de riesgos de ACAPS pretende ayudar a los responsables de la toma de decisiones humanitarias a comprender los posibles cambios futuros en un contexto específico y su impacto humanitario. Si se exponen los probables desarrollos futuros y se entiende su impacto, se pueden incluir en la planificación y preparación de la respuesta. La base metodológica de este análisis de riesgos se describe en la [nota metodológica del análisis de riesgos de ACAPS](#). Esta se basa en una revisión de datos secundarios y se complementa con entrevistas a expertos.

El análisis de riesgos no es una ciencia exacta. Un acontecimiento identificado por un analista como peligro puede ser identificado por otro como desencadenante de un acontecimiento diferente que el segundo analista considera como peligro. El análisis de riesgos depende de una sólida comprensión del contexto y de la investigación en la interacción de las variables que causan o se resisten al cambio.

El riesgo es una función de la gravedad y la probabilidad. El riesgo que plantea un suceso potencial aumenta a medida que incrementa la gravedad prevista del suceso o la probabilidad de que se produzca. No es necesario que la probabilidad de un riesgo sea alta para que sea preocupante.

Cada uno de los riesgos presentados en este informe se introduce con una **justificación** que explica el riesgo y su contexto. Los **desencadenantes** identificados son una serie de factores y acontecimientos que podrían contribuir a la materialización del riesgo. La sección de **impacto** describe las probables consecuencias humanitarias de cada riesgo.

AGRADECIMIENTOS

ACAPS agradece a los socios del consorcio del Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencias (MIRE) y a OCHA por sus aportes. El análisis presentado en este informe es responsabilidad exclusiva de ACAPS y no refleja necesariamente la posición de las organizaciones citadas.

PANORAMA DE LA SITUACIÓN

Conflicto armado

La diversificación de los grupos armados tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016 y los conflictos por el control territorial han contribuido significativamente al aumento de los desplazamientos y confinamientos en las zonas anteriormente ocupadas por las FARC-EP. El conflicto está fragmentado, con diferentes grupos y dinámicas presentes en distintas partes del país ([CORE 26/07/2021](#)).

El conflicto entre los grupos armados está relacionado con los intereses económicos en las zonas donde las FARC-EP operaban anteriormente, como en las regiones del Pacífico y el Catatumbo. Los intereses económicos están asociados a la expansión territorial y al control de rutas de transporte y regiones estratégicas para el cultivo de coca, la extracción de oro y el control general de la comunidad ([Pares 19/08/2021](#); [Indepaz 13/09/2021](#)). Además de los enfrentamientos entre grupos armados, también se producen enfrentamientos con las fuerzas del Estado que buscan combatir a estos grupos armados.

Existen diferentes grupos armados actualmente activos en Colombia, entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Caparros (o Caparrapos), Los Rastrojos y el Ejército Popular de Liberación (EPL, también llamado Los Pelusos). Estos grupos están presentes en varias partes del país, con diferencias en su alcance territorial. Están presentes en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Meta, entre otras regiones ([Indepaz 04/10/2021](#); [Pares 19/08/2021](#)).

Tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, se han formado 30 grupos. Estos grupos están formados por miembros que no se desmovilizaron con el acuerdo de paz de 2016, miembros desmovilizados que posteriormente regresaron a los grupos armados y nuevos reclutas. Algunos de los principales grupos son Segunda Marquetalia, las estructuras afiliadas a alias 'Gentil Duarte' como el Comando Coordinador de Occidente (CCO), y el Frente Oliver Sinisterra ([InSight Crime 27/10/2019](#); [Indepaz 04/10/2021](#); [CORE 26/07/2021](#)). Estos grupos tienen aproximadamente 5.200 miembros ([Indepaz 04/10/2021](#)).

Desplazamientos forzados y confinamientos

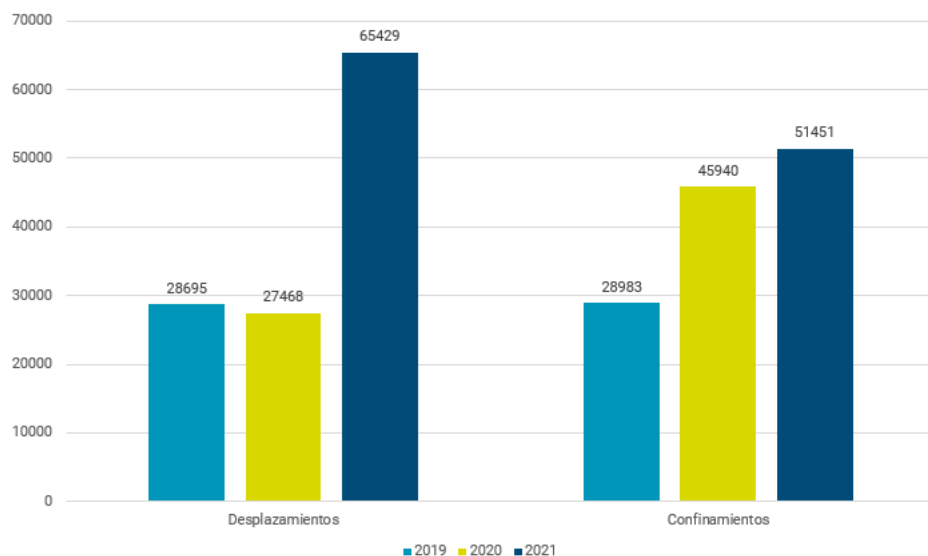
Hay un aumento en el número de desplazamientos masivos¹ y confinamientos derivados del conflicto armado. En 2020, 27.400 personas se vieron involucradas en desplazamientos masivos, cifras similares a las de 2019. A 31 de octubre, más de 65.000 personas han sido desplazadas en 2021, lo que supone un aumento del 138% respecto a las cifras de 2020.

¹ El "desplazamiento masivo" se refiere al desplazamiento de al menos 50 personas o diez hogares en un solo evento (OCHA consultado 26/09/2021)

El número de personas afectadas por confinamientos también ha aumentado, pasando de 29.000 en 2019 a 51.400 en 2021, a fecha de octubre de 2021. Los desplazados y confinados en 2021 se concentran en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca (OCHA consultado 05/11/2021; OCHA 26/10/2021).

El desplazamiento individual² es difícil de rastrear y no se dispone de datos completos y actualizados. La evidencia sugiere que ocurre con frecuencia (ACAPS 29/09/2021).

Figura 1. Desplazamientos Masivos y confinamientos en 2019–2021



Fuente de información: OCHA (05/11/2021 y 26/10/2021)

² El "desplazamiento individual" se refiere a los desplazamientos de menos de 50 personas o diez hogares en un solo evento (OCHA 2013)

COVID-19

Aunque el avance del plan nacional de vacunación en Colombia ha permitido una mejora en la economía del país y una disminución de las medidas de contención, el impacto socioeconómico de la pandemia en Colombia continúa.

Por un lado, durante el primer semestre de 2021, el país experimentó un crecimiento económico del 8,8%, frente al 7,4% del mismo periodo de 2020 (DANE 17/08/2021 y 14/08/2020). Se espera que el crecimiento anual se sitúe en el 9% a finales de 2021 (Portafolio 23/09/2021 and 24/09/2021). Por otra parte, las tasas de desempleo no han alcanzado los niveles anteriores a la pandemia. En septiembre de 2021, la tasa de desempleo fue del 12,1% (DANE 09/2021); la tasa fue del 10,2% para el mismo mes de 2019 (Portafolio 31/10/2019).

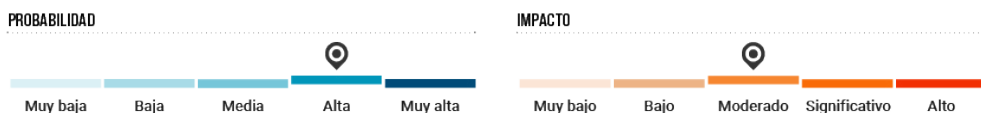
La pandemia ha provocado un aumento de las personas que viven en la pobreza en el país, llegando a 18,9 millones en 2021 frente a 17,5 millones antes de la pandemia (World Bank consultado 06/10/2021). También ha agravado la inseguridad alimentaria (FAO y PMA 30/07/2021).

Refugiados y migrantes de Venezuela

Colombia ha acogido a 1,74 millones de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela (R4V 22/10/2021). El 87% de ellos ingresó al país por primera vez entre 2016-2019, el 9% en 2020 y el 2% a corte de agosto de 2021. El 2% restante entró en el país antes de 2015. El 58% de estos refugiados y migrantes tiene trabajo, el 96% planea quedarse al menos un año más y el 3% planea regresar a Venezuela (DANE 15/10/2021).

A agosto de 2021, el 89% de los venezolanos ha considerado solicitar el Permiso Temporal de Protección (PPT) lanzado por el Gobierno colombiano para regularizar su situación migratoria (DANE 15/10/2021). El PPT es un mecanismo de protección temporal para refugiados que permite el tránsito de venezolanos hacia el país. Los venezolanos que se acojan a esta medida tendrán diez años para adquirir su visa de residente (Ministerio de Relaciones Exteriores 01/03/2021). Alrededor de 1,2 millones de venezolanos están en proceso de solicitud, y unos 345.000 ya han recibido el TPP (Blu Radio 26/10/2021).

1. Cambios significativos en el control territorial desencadenan un escalamiento del conflicto y provocan un aumento de las necesidades humanitarias



Justificación

El aumento del número de grupos armados tras la desmovilización de las FARC-EP y las nuevas configuraciones en sus alianzas facilitan su expansión y el control de rutas de transporte y regiones estratégicas (Indepaz 13/09/2021; Pares 19/08/2021). Desde el 1 de abril hasta el 8 de octubre de 2021, se ha producido un aumento del 111% de los eventos violentos en comparación con el mismo período de 2020 y un aumento del 34% en comparación con el mismo período de 2019. Durante los últimos seis meses, el 71% de los eventos violentos se han producido en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Nariño (ACLEDD consultado 12/11/2021) Estos hechos violentos incluyen enfrentamientos entre grupos armados y ataques contra la población civil.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021, estos ocho departamentos concentraron el 98% de los desplazamientos y el 99% de los confinamientos a nivel nacional (OCHA consultado 05/11/2021). En agosto de 2021, 46.000 personas seguían desplazadas por falta de garantías de seguridad que facilitarían su retorno (OCHA 22/09/2021).

El conflicto corre el riesgo de intensificarse debido a posibles incumplimientos de los pactos de no agresión y al aumento de los enfrentamientos entre los grupos armados para ampliar su control territorial, lo que incrementaría los sucesos violentos. Este aumento de la violencia provocaría un mayor número de personas afectadas por el desplazamiento y el confinamiento, personas en necesidad de ayuda humanitaria y retornos sin garantías de seguridad.

Las poblaciones expuestas a las acciones de los grupos armados se enfrentan a una reducción de su acceso a los servicios esenciales, a los medios de subsistencia y a la ayuda humanitaria debido al incremento de los confinamientos y desplazamientos. Las zonas con

mayor riesgo de aumento de la violencia son aquellas que tenían una fuerte presencia de las FARC-EP antes del acuerdo de paz en 2016 y que han sido disputadas por otros grupos armados tras la desmovilización de las FARC-EP. Estas zonas incluyen el norte de Antioquia, la región del Catatumbo y la región del Pacífico en los departamentos de Chocó y Nariño, con presencia del ELN, las AGC y los grupos post-FARC.

El número de víctimas de minas antipersona (MAP) también ha aumentado en un 582% entre 2017-2020, lo que hace que estas minas sean otro factor relevante a considerar. Hubo 57 víctimas de minas en 2017, 221 en 2018, 352 en 2019, 389 en 2020 y 263 durante el primer semestre de 2021 (ICRC 2021; CICR 12/08/2021).

Desencadenantes por región:

Entre los principales desencadenantes hay dos dinámicas. La primera es la escalada de las disputas territoriales en zonas donde ningún actor armado ha consolidado el control territorial. La segunda es la consolidación de un grupo armado o varios grupos bajo alianzas y pactos de no agresión en una región específica.

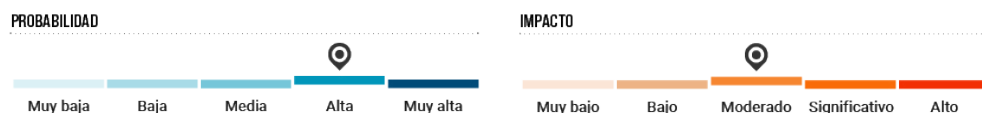
- La captura del líder de las AGC, alias 'Otoniel', puede desencadenar la violencia en regiones donde las AGC han cedido el control territorial a las 'franquicias', que han expandido el crimen organizado a través de bandas locales en Colombia. La violencia en Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Bolívar y Antioquia puede aumentar con el debilitamiento de las franquicias sin el respaldo de las AGC, haciendo que estas regiones sean vulnerables a los ataques de otros grupos armados (InSight Crime 25/10/2021). La violencia en estos departamentos también puede aumentar con la búsqueda de los culpables de la captura de Otoniel y la consolidación de un nuevo líder de las AGC (El Colombiano 25/10/2021).
- En el norte de Antioquia, el sur de Bolívar y el sur de Córdoba, la presencia de la Segunda Marquetalia a través de los Frentes 18 y 36 agudiza los enfrentamientos entre las AGC, el ELN y Los Caparros (Indepaz 13/09/2021; FIP 09/07/2021). Es probable que el número de grupos armados en la región aumente ya que pretenden controlar el paso a la región del Magdalena Medio y su conexión con los puertos marítimos del norte del país, la minería de oro y los cultivos de coca. Estos tres departamentos representan el 18% de los cultivos de coca y el 57% de la minería del país (Observatorio de Drogas de Colombia 2020; UNODC 15/07/2021).
- La expansión territorial de las AGC y el ELN hacia el sur del Chocó y el noroeste de Antioquia y su interés por controlar la región del Pacífico del Chocó puede aumentar las disputas territoriales (InSight Crime 24/10/2021; Indepaz 13/09/2021). Principalmente, el control de la región del Pacífico del Chocó facilita el narcotráfico y permite la extracción y el tráfico de oro en los municipios de Nóvita, El Cantón de San Pablo, Istmina, Río Quito y Unión Panamericana. Estos municipios concentran el 60% de la extracción de oro en el departamento (UNODC 15/07/2021)

- En los municipios de Argelia y El Tambo, en el departamento del Cauca, pueden aumentar los enfrentamientos entre el CCO (a través de las columnas móviles Jaime Martínez y Carlos Patiño) y el ELN, dado su interés por expandirse hacia el norte del Valle del Cauca (Pares 19/08/2021; Indepaz 13/09/2021). Estos enfrentamientos están asociados al control del acceso fluvial a la región del Pacífico a través del río Micay, el cual facilita el tránsito de economías irregulares, principalmente del narcotráfico.
 - En el Catatumbo y el sur del Cesar, los enfrentamientos entre el ELN, el EPL, Los Rastrojos y las AGC podrían intensificarse, dadas las alianzas entre el EPL, Los Rastrojos y las AGC para debilitar al ELN (Pares 22/02/2021; InSight Crime 19/01/2021). Alrededor del 28% de los cultivos de coca del país se concentran en estas zonas, facilitando el tráfico de drogas hacia Venezuela y Brasil (Observatorio de Drogas de Colombia 2020)
 - La expansión y el control territorial de la CCO, con supuestas alianzas con las 'Post FARC' en el triángulo de Telembí (conformado por los municipios de Magüí Payán, Barbacoas y Roberto Payán), podría generar disputas por el territorio con las AGC (Pares 19/08/2021; Indepaz 09/2021). La importancia del triángulo de Telembí está relacionada con la concentración del 24% de los cultivos de coca en el departamento de Nariño y con el hecho de ser un punto de conexión con el municipio de Tumaco, donde se registra cerca del 29% de los cultivos de coca del departamento de Nariño (Observatorio de Drogas de Colombia 2020).
- El aumento de las disputas territoriales eleva los niveles de inseguridad y **dificulta el acceso humanitario a las poblaciones necesitadas** debido a los riesgos de seguridad que pueden enfrentar los miembros de las organizaciones humanitarias (cf. riesgo 2).
 - **Las necesidades humanitarias aumentan**
 - o La escalada del conflicto aumenta las necesidades no cubiertas. Se prevén necesidades en los ámbitos de salud, protección, seguridad alimentaria, nutrición y agua, saneamiento e higiene.
 - o Existen riesgos de protección asociados a las comunidades que viven en zonas de disputa o enfrentan cambios en el control territorial donde son blanco de los grupos armados por su supuesta colaboración con los respectivos adversarios.
 - o Se deteriora la salud física y mental de las poblaciones en regiones con altos niveles de conflicto.
 - o Incremento de la violencia sexual y de género como consecuencia de la vulnerabilidad de las mujeres a las agresiones sexuales en el contexto del conflicto. Entre 1958 y 2017, cerca del 92% de las agresiones sexuales en el contexto del conflicto armado fueron contra las mujeres y continúan siéndolo tras el acuerdo de paz de 2016 (Centro Nacional de Memoria Histórica accessed 12/11/2021; HRW accessed 12/11/2021).
 - o El aumento de las restricciones al acceso a los cultivos y a los medios de vida a causa de la instalación de las MPA, el confinamiento y los combates, conducen a un aumento de las necesidades de seguridad alimentaria y a una interrupción más frecuente de las actividades generadoras de ingresos.
 - **La capacidad de respuesta es insuficiente.** Es probable que las instituciones estatales y las organizaciones humanitarias no tengan suficiente capacidad para responder a las necesidades de las comunidades desplazadas y confinadas.
 - **Aumento del número de desplazados que regresan a sus lugares de origen sin garantías de seguridad.** Los desplazados internos deciden regresar a sus comunidades por la falta de capacidades institucionales que brinden respuestas humanitarias dignas y la asistencia requerida (OCHA 26/10/2021).
 - **Aumento del número de refugiados y migrantes venezolanos afectados** por el desplazamiento forzado y el reclutamiento. En 2020, aproximadamente 1.650 venezolanos fueron desplazados en Colombia como consecuencia del conflicto armado. Entre 2017-2020 se registraron 33 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (CODHES 02/07/2021). Los venezolanos suelen desconocer la dinámica del conflicto armado y tienen una alta vulnerabilidad socioeconómica.

Impactos

- **El aumento de la violencia y los combates provocan un incremento de los desplazamientos y el confinamiento.** Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021, más de 65.000 personas se vieron involucradas en desplazamientos masivos, y alrededor de 51.000 fueron confinadas (OCHA consultado 05/11/2021). Teniendo en cuenta estas cifras, en los próximos seis meses podrían producirse entre 50.000 y 80.000 desplazados internos y alrededor de 50.000 confinamientos. Estas estimaciones se enmarcan en la posible escalada del conflicto en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Nariño. En estos departamentos se ha concentrado el 71% de los actos violentos, el 98% de los desplazamientos y el 99% de los confinamientos en los últimos seis meses.
- **El aumento del uso de las MAP** está afectando a un número creciente de personas con heridas y muertes, así como restringido el acceso a los cultivos en las zonas donde se han instalado las minas.
- **Aumento del reclutamiento forzoso por parte de los grupos armados, especialmente de menores.** En los últimos meses, la población y las instituciones gubernamentales han denunciado el reclutamiento forzado de menores en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca y Norte de Santander (Pares 11/06/2021; OCHA 22/09/2021).

2. El escalamiento del conflicto conduce a un deterioro significativo del acceso humanitario a las poblaciones afectadas



Justificación

Existe el riesgo de un deterioro significativo en el acceso de la ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas debido a un escalamiento del conflicto

En relación con el riesgo 1, también es probable que el escalamiento del conflicto provoque un aumento de las restricciones del acceso de las organizaciones humanitarias a las poblaciones afectadas.

Actualmente están aumentando los ataques contra el personal sanitario, las ambulancias y las instalaciones sanitarias. Se registraron 218 ataques contra misiones médicas en 2019, 325 en 2020 y 256 a junio del 2021 (CICR 14/03/2021; Ministry of Health 02/06/2021).

En relación con las barreras para la asistencia humanitaria, entre enero y agosto de 2021, sólo el 31% de los confinamientos reportados fueron atendidos debido a las restricciones de acceso, como la instalación de MAPs y los combates entre grupos armados (OCHA 22/09/2021).

En algunos casos, los grupos armados restringen el acceso de la población a la asistencia humanitaria para evitar la denuncia de hechos violentos, infundiendo miedo a la personas mediante amenazas y represalias (OCHA 30/03/2020). Dada esta situación, no es posible registrar los hechos violentos, no se puede recoger información precisa sobre las necesidades de las personas afectadas y el acceso a la asistencia humanitaria es muy limitado.

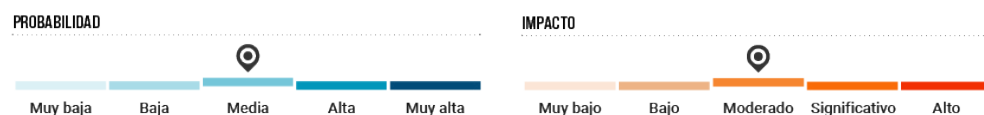
Desencadenantes

- El conflicto entre los diferentes grupos armados se mantiene, y no hay hegemonía territorial de uno de los grupos.
- Continúa la diversificación de los grupos armados que desconocen la labor y los principios humanitarios, y no confían en los actores humanitarios.
- Aumentan las amenazas y las represalias de los grupos armados contra las poblaciones afectadas para impedir que se denuncien los hechos violentos.

Impactos

- Aumentan las necesidades no atendidas debido a que las organizaciones humanitarias no pueden llegar a las poblaciones afectadas.
- Incrementa el número de zonas con restricciones severas de acceso para las organizaciones humanitarias debido a la instalación de MAP.
- Aumentan los ataques a las organizaciones humanitarias y la inseguridad de los equipos desplegados en las zonas afectadas.
- Existe menos datos e información disponible sobre las poblaciones afectadas dado que no se pueden realizar evaluaciones de necesidades. Además, dentro las comunidades afectadas persiste el miedo a denunciar los hechos ante las autoridades y las organizaciones humanitarias.
- La falta de información hace que las necesidades reales y la situación actual de la crisis humanitaria sean invisibles, lo que contribuye a que haya lagunas en la respuesta y necesidades no atendidas.
- Las zonas afectadas serían las regiones señaladas en el riesgo 1, relacionado al escalamiento del conflicto.

3. Durante los seis meses previos a las elecciones de 2022, aumenta la violencia contra los líderes políticos y sociales y surgen nuevas protestas, con consecuencias humanitarias



Justificación:

Hay una tendencia a la violencia contra los líderes políticos y sociales durante los períodos preelectorales. Seis meses antes de las elecciones de 2014, se reportaron 121 actos de violencia (incluyendo amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, ataques y asesinatos contra líderes políticos y sociales) (MOE 04/04/2018). Del mismo modo, seis meses antes de las elecciones de 2018, se registraron 135 incidentes violentos relacionados con las elecciones (Pares 06/06/2018; MOE 13/10/2021). Esta tendencia se mantiene hasta los seis meses previos a las elecciones de 2022; entre el 13 de marzo y el 13 de octubre se registraron 304 actos violentos, lo que supone un incremento del 126% respecto al mismo período preelectoral del 2018 (MOE 13/10/2021). Estos ataques se dieron en el contexto de un aumento generalizado de actos violentos dirigidos contra líderes sociales en Colombia (Comisión Colombiana de Juristas 25/08/2021).

De los 304 actos violentos reportados en 2021, el 27% fueron agresiones contra mujeres y sucedieron en el 84,4% de los departamentos de Colombia. Durante el primer semestre de 2021, el 51% de los hechos violentos se concentraron en seis departamentos: Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Tolima y Norte de Santander (MOE 13/10/2021).

En el contexto de las elecciones al Congreso en marzo de 2022 y de las elecciones presidenciales en mayo, hay un riesgo en el aumento de la violencia hacia los líderes políticos y sociales que apoyan el proceso de paz.

Al 13 de septiembre de 2021, 30 de los 50 asesinatos reportados en 2021 por violencia política ocurrieron en las Circunscripciones Especiales de Transición para la Paz (CTEP), que son los 167 municipios más afectados por el conflicto armado (Caracol 15/10/2021). De las 16 regiones que conforman las CTEP, las regiones que registraron el 68% de los hechos violentos son: Bajo Cauca, Magdalena-Guajira-Cesar, y Nariño-Cauca-Valle del Cauca (MOE 24/08/2021).

Al 23 de agosto de 2021, los partidos políticos con mayor número de víctimas eran el Partido Alianza Verde (29%), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (13%) y la Colombia Humana-Unión Patriótica (13%), que son partidos de oposición no alineados con el Gobierno (Pares 03/09/2021).

Los ataques contra los líderes ponen de manifiesto la fragilidad del acuerdo de paz y las deficiencias del Estado en la protección de las comunidades y los defensores de la paz.

También existe el riesgo de un aumento de las protestas sociales antes de las elecciones, lo que afectaría al acceso de la población a los bienes y servicios.

Ha habido descontento con el Gobierno por la desigualdad económica y social, y los abusos policiales amplificadas por los efectos de la pandemia. En abril de 2021, una ola de protestas relacionadas con una impopular reforma tributaria dio lugar a un prolongado paro nacional que, a noviembre, todavía congrega a personas (El Colombiano 11/10/2021; Portafolio 19/07/2021; ICG 02/07/2021).

En el contexto de las elecciones de 2022, es probable que las protestas aumenten, ya que la gente puede tratar de ejercer presión sobre los candidatos políticos en relación con el descontento en temas de salud, educación, pobreza y reforma de la policía, los cuales han sido presentados como proyectos de ley ante el Congreso pero aún no han sido debatidos.

El paro nacional ha provocado escasez de combustible, desabastecimiento de productos, aumento de precios y ha afectado el transporte de productos agrícolas. Por ejemplo, en mayo de 2021, la escasez nacional de productos alcanzó el 19,3%. Entre los productos menos disponibles en el mercado estaban los huevos, el pollo y la carne de res (La República 04/06/2021; El Colombiano 10/05/2021; FAO y PMA 30/07/2021).

Desencadenantes

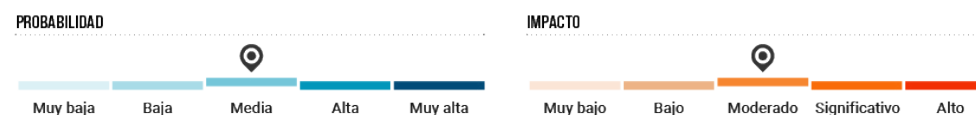
El Estado no tiene suficiente capacidad para brindar protección a los líderes sociales, políticos y candidatos a las elecciones de 2022 que apoyan el proceso de paz, particularmente en las 16 regiones que conforman las CTEP.

- El conflicto y el proceso de paz ocupan un lugar destacado en el debate político durante las campañas electorales, por lo que es probable que las propuestas de los candidatos al Congreso y a la presidencia incluyan una discusión sobre el proceso de paz.
- Los Candidatos y líderes políticos y sociales apoyan las protestas para ganar popularidad en las elecciones de 2022 (El País 07/10/2021; Caracol Radio 06/08/2021). En particular, estos líderes apoyan a los partidos políticos de la oposición.
- El Gobierno no cumple con los acuerdos alcanzados en el paro nacional en materia de salud, educación, pobreza y reforma policial, entre otros temas, ni debate en el Congreso los diez proyectos de ley relacionados con los acuerdos alcanzados con la población y el Comité Nacional del Paro.
- Los grupos armados aprovechan las protestas para cometer actos de violencia y vandalismo. Entre el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021 se registraron 56 acciones violentas de grupos armados con prácticas paramilitares y de autodefensa en el marco de las protestas sociales. Estos actos violentos estaban dirigidos a los manifestantes para generar miedo a través de la violencia (JEP 28/07/2021).

Impactos

- Aumentan las necesidades de protección de líderes sociales, políticos y candidatos a las elecciones de 2022.
- Incrementa el número de heridos y muertos en enfrentamientos durante las protestas sociales derivadas de los desacuerdos entre la población y el Gobierno. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, Colombia es el segundo país con mayor número de violaciones al derecho a la vida en el marco de las protestas sociales (JEP 28/07/2021).
- Los bloqueos de las principales carreteras dificultan el acceso a los mercados y a los medios de subsistencia, lo que provoca la escasez de productos básicos y el aumento de los precios.
- El personal de las misiones humanitarias y de las ambulancias se verá probablemente afectado por las protestas sociales. Durante los primeros 27 días del paro nacional en Colombia, hubo más de 180 ataques contra misiones médicas (Infobae 25/05/2021). Los principales objetivos de los ataques fueron las ambulancias y el personal médico. 39 misiones médicas también se vieron afectadas por bloqueos de carreteras desde el inicio del paro nacional el 28 de abril de 2021 hasta junio de 2021 (Ministerio de Salud 02/06/2021)
- Las organizaciones humanitarias no pueden prestar asistencia humanitaria a las personas necesitadas dado que las protestas y los bloqueos de carreteras dificultan el acceso a la población afectada.

4. El fortalecimiento de los grupos armados en Venezuela y el aumento de los enfrentamientos en los corredores fronterizos entre Colombia y Venezuela provocan desplazamientos hacia Colombia



Justificación

Existe el riesgo de nuevos desplazamientos hacia Colombia como consecuencia de un posible escalamiento del conflicto en los estados fronterizos de Venezuela con Colombia. El fortalecimiento de los grupos armados en las zonas fronterizas da lugar a disputas territoriales entre los grupos armados y las fuerzas armadas venezolanas.

Varios grupos armados colombianos tienen presencia en Venezuela, entre ellos el ELN y dos estructuras post-FARC: la Segunda Marquetalia y el Frente 10 (InSight Crime 13/10/2021).

Por un lado, existe la posibilidad de un aumento en los combates entre grupos armados por el control territorial de los corredores fronterizos con Colombia, la explotación de la minería ilegal de coltán y el narcotráfico en Apure, Bolívar y Táchira en Venezuela. El coltán se extrae en el estado venezolano de Bolívar y luego se transporta a Colombia con el apoyo de las fuerzas armadas venezolanas (InSight Crime 18/08/2021). En cuanto al narcotráfico, el control de corredores estratégicos como Puerto Nariño y Puerto Inírida en Colombia es fundamental para el tráfico de drogas desde Venezuela hacia el oeste de Colombia y Brasil.

Por otro lado, también existe la posibilidad de un incremento de los enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas armadas venezolanas. Estos conflictos están relacionados con el fin del apoyo del gobierno venezolano hacia algunos grupos armados colombianos de izquierda y con los cambios de alianzas gracias a intereses económicos y políticos. Los enfrentamientos entre los grupos post-FARC y las fuerzas armadas venezolanas en el estado venezolano de Apure en marzo de 2021 evidencian un desacuerdo por intereses económicos

y políticos entre los grupos armados y el Gobierno venezolano, que hasta el año 2020 daba cierto apoyo a los grupos armados colombianos de izquierda (InSight Crime 13/10/2021). No obstante, hay evidencias del apoyo del gobierno venezolano a los grupos post-FARC para facilitar su permanencia y operación en territorio venezolano a través de alianzas para el beneficio de economías ilícitas, incluyendo la explotación de drogas y minerales (InSight Crime 18/10/2021 and 18/08/2021; El Nacional 20/05/2021).

La operación militar que llevo a cabo el Gobierno venezolano contra el Frente 10 en Marzo 2021 trajo como resultado el desplazamientos de más de 5.800 personas hacia Colombia (CISP et al. 27/03/2021; GIFMM 19/04/2021). Sin embargo, dado que la operación de marzo sólo tenía como objetivo el Frente 10, no está claro si el Gobierno venezolano sigue apoyando (o tolerando) a otros grupos presentes en el territorio venezolano (InSight Crime 13/10/2021).

Con respecto al fortalecimiento de los grupos armados dentro de Venezuela, algunas de las necesidades de la población venezolana en la zona fronteriza siguen sin ser atendidas, lo que los hace vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos armados. En los estados fronterizos venezolanos de Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, el Estado ha descuidado algunas de sus obligaciones para con sus ciudadanos. La población que reside en estos estados vive en condiciones de pobreza. Dependen de un sistema de salud precario y de un sistema educativo deficiente que facilita la penetración y el reclutamiento de grupos armados en las comunidades (FundaRedes 15/10/2021).

Desencadenantes

- Los grupos armados se fortalecen mediante alianzas para la minería ilegal y el narcotráfico.
- Aumento en el número de miembros de grupos armados en los estados fronterizos venezolanos de Táchira, Apure y Bolívar, dado que pretenden tener mayor presencia y control en estos territorios y beneficiarse de las rentas económicas derivadas del narcotráfico, y la explotación y comercialización ilegal de minerales (InSight Crime 18/10/2021 y 18/08/2021). Se estima que entre 1.100 y 1.200 miembros del ELN y 700 miembros de grupos post-FARC se encuentran en estos estados venezolanos fronterizos con Colombia (Reuters 01/10/2021).
- El Gobierno venezolano retira su apoyo a los grupos armados colombianos debido a los enfrentamientos con las fuerzas armadas venezolanas. Esto como consecuencia de la finalización de las alianzas y los intereses económicos y políticos.
- Los enfrentamientos armados entre la Nueva Marquetalia y el Frente 10, así como entre

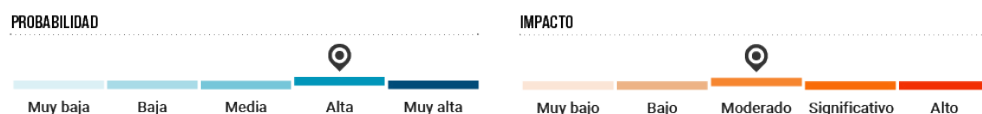
los grupos post-FARC y el ELN, en los territorios de Apure, Zulia, Táchira y Bolívar aumentan como consecuencia de las disputas por el control territorial de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal (FundaRedes 15/10/2021 y 06/09/2021).

- Las filas de los grupos armados presentes en la zona fronteriza se fortalecen mediante el reclutamiento de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, en Venezuela y en los pasos fronterizos. Las precarias condiciones económicas de algunos migrantes y refugiados venezolanos los hacen más vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos armados, dado que éstos ofrecen comida, refugio y dinero a cambio de trabajo en el procesamiento de coca, vigilancia e inteligencia, entre otras actividades (Blu Radio 02/09/2021).
- El Gobierno venezolano carece de capacidad para responder a las necesidades humanitarias de las personas afectadas por el conflicto en el territorio venezolano, lo que provoca su desplazamiento a Colombia.

Impactos

- Las capacidades en Colombia para atender futuros desplazamientos en las zonas fronterizas de La Guajira, Arauca y Norte de Santander están desbordadas.
- Aumento de las necesidades humanitarias de las comunidades potencialmente desplazadas hacia Colombia por los enfrentamientos armados en Venezuela. Las principales necesidades incluyen la salud física y mental, especialmente para niños, adolescentes, ancianos y mujeres embarazadas; la seguridad alimentaria y nutrición, con un enfoque diferencial que considere los grupos de población de los ancianos, las personas con discapacidad, los recién nacidos, los niños y las mujeres lactantes y embarazadas; el agua, el saneamiento y la higiene para evitar la propagación de enfermedades, incluido el COVID-19; y el alojamiento.
- Aumento de las violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos armados y las necesidades de protección. En su mayoría, los desplazados son vulnerables a dinámicas relacionadas con el conflicto, como las agresiones sexuales, el reclutamiento forzoso y las minas terrestres, entre otras vulnerabilidades.

5. La inestabilidad política, la inseguridad y las necesidades humanitarias en Haití hacen que más migrantes y refugiados haitianos lleguen a Colombia donde se ven afectados por el conflicto



Justificación

Existe el riesgo de un aumento en la llegada de migrantes y refugiados haitianos al territorio colombiano como consecuencia de la continuación y agravamiento de la crisis en su país, lo que los pone en riesgo de ser afectados por el conflicto en Colombia, con graves consecuencias para sus necesidades de protección.

Haití está actualmente afectada por una crisis humanitaria, económica y política. Los repetidos aplazamientos de las elecciones y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 han amplificado la inestabilidad política (BBC 28/09/2021; ICG 30/09/2021; ACAPS 26/10/2021). La inseguridad y la violencia desenfrenadas relacionadas con la presencia de bandas armadas han provocado desplazamientos internos y limitado el acceso humanitario dentro del país (ICG 30/09/2021). Esta situación se ve agravada por las necesidades humanitarias relacionadas con el terremoto de agosto de 2021, que causó la muerte de 2,200 personas y afectó a 800,000 más. Para finales de Septiembre más de 38,000 personas seguían desplazadas (OCHA 07/10/2021). Los daños y la destrucción de las cosechas y las infraestructuras causados por el terremoto y la tormenta tropical que le siguió poco después, así como los problemas económicos, han empeorado la inseguridad alimentaria, con 4,3 millones de personas que sufren una inseguridad alimentaria aguda (fase 3 de la IPC o superior) y que necesitan ayuda urgente (IPC 24/09/2021). Estos factores han provocado un aumento de los flujos migratorios hacia América del Norte. La principal ruta desde Sudamérica hacia Centroamérica pasa por Colombia y Panamá (El País 12/09/2021).

El municipio de Necoclí, en la región de Urabá, es un punto de paso hacia el Tapón del Darién, un corredor selvático de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá. Los migrantes deben esperar en Necoclí para montar en embarcaciones hasta Capurgana, donde pueden iniciar su viaje a pie a través del Tapón del Darién. Sin embargo, las autoridades de Colombia y Panamá habían establecido una cuota de 500 migrantes diarios para usar las lanchas que los transportaran a Capurgana (El Tiempo 21/09/2021; Televisa 14/10/2021). Más de 88.000 personas cruzaron el paso del Darién entre enero y septiembre de 2021 (OCHA 24/09/2021). Cerca de 21.000 haitianos se encontraban en el municipio de Necoclí, Antioquia, a mediados de octubre de 2021 (Radio Nacional 10/10/2021; ADRA 05/10/2021). Para la última semana de octubre, el Gobierno colombiano informó que cerca de 14.500 haitianos salieron del país tras la cumbre de cancilleres sobre la crisis migratoria haitiana celebrada el 20 de octubre de 2021, pero aún quedan 7.000 haitianos en Necoclí (Blu Radio 24/10/2021).

Mapa: Ruta de migrantes haitianos desde Necoclí a Panamá

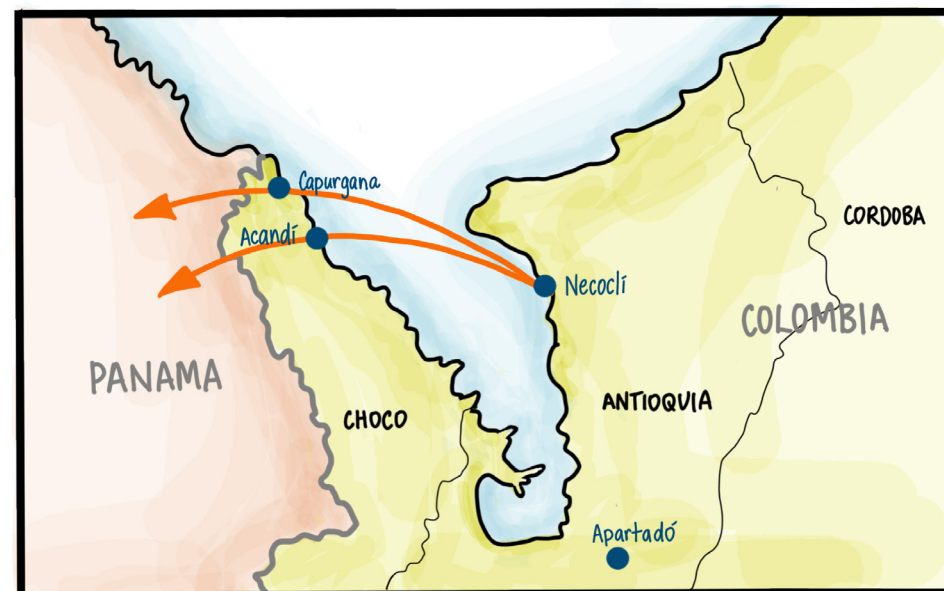


Ilustración por Sandie Walton-Ellery

Las implicaciones humanitarias de la presencia de haitianos en Necoclí son significativas. Por un lado, los haitianos desconocen la dinámica del conflicto en Colombia, lo que los coloca en una posición vulnerable. En Urabá hay presencia de diferentes grupos armados que ejercen cierto grado de control sobre las rutas fronterizas (OCHA 24/09/2021). Los migrantes y refugiados haitianos podrían sufrir abusos (incluyendo violaciones, tráfico de personas y reclutamiento forzado) por parte de los grupos armados. Hay relatos de personas que mueren intentando cruzar la frontera (El País 29/09/2021). Por otro lado, la capacidad institucional y humanitaria para asistir a los haitianos en Necoclí es insuficiente. Sus necesidades han sobrepasado la capacidad de los actores humanitarios para responder y proporcionar servicios de salud y saneamiento (OCHA 24/09/2021).

Desencadenantes

- El número de haitianos que abandonan su país aumenta por las siguientes razones
 - o Aumento de la inseguridad y la violencia criminal en Haití
 - o Aumento de la inestabilidad política en Haití
 - o Falta de respuesta estatal y humanitaria a las necesidades humanitarias relacionadas con el terremoto de agosto de 2021.
- Aumento del número de migrantes que llegan a Colombia como punto de paso para su migración a Norteamérica.
- Las fronteras entre Panamá y Colombia se cierran para controlar la migración y la propagación del COVID-19, dejando a los migrantes varados en Colombia.
- Se restringe el número de personas que pueden transitar entre Colombia y Panamá.

Impactos:

- Aumento de las necesidades de protección de los migrantes al cruzar el Tapón del Darién, dadas las difíciles condiciones geográficas de la región y el riesgo de abusos por parte de grupos armados.
- Aumento de la violencia sexual contra mujeres y niños haitianos durante su tránsito en Colombia.
- Dada su vulnerabilidad socioeconómica y la presencia de grupos armados, los migrantes son objeto de reclutamiento forzoso y de trata de personas durante su tránsito hacia Colombia.
- Los migrantes haitianos son objeto de explotación laboral.
- Las familias de los migrantes están separadas, y algunos miembros de la familia llegan a Panamá mientras que otros no pueden hacerlo (por ejemplo, debido a la falta de recursos o a las limitaciones de las cuotas).

- Existen barreras para el acceso de los migrantes a la asistencia sanitaria porque no están afiliados a un sistema de seguro médico en Colombia, y desconocen las rutas y sus derechos para acceder a los servicios de emergencia.
- Aumenta la necesidad de acceso a refugio y agua potable, ya que muchos haitianos acampan a la intemperie sin acceso a instalaciones sanitarias y agua potable (RCN Radio 24/09/2021; El País 30/09/2021).
- La capacidad de respuesta de las instituciones estatales para proporcionar atención primaria a los haitianos atrapados en Colombia está desbordada.

FACTORES AGRAVIANTES

Temporada de lluvias

Colombia afronta actualmente la segunda temporada de lluvias del año. Esta temporada comienza en septiembre y se intensifica en los meses de octubre-noviembre. Entre octubre-noviembre de 2021, se espera que las precipitaciones estén un 40% por encima de los volúmenes históricos reportados en años anteriores, provocando riesgos de inundación. Las regiones más afectadas serán la Andina, el Caribe y el Pacífico (IDEAM 09/2021).

COVID-19

Se espera una cuarta ola de infecciones en noviembre (Caracol Radio 15/10/2021). Los principales afectados serán las personas que aún no se han vacunado. Esta cuarta ola está relacionada con la circulación de la variante Delta en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander y Atlántico (Semana 25/10/2021). A nivel nacional, el 40% de la población colombiana ha recibido el esquema completo de vacunación, lo que significa que la mayoría de la población aún está desprotegida (Ministry of Health accessed 26/10/2021).

VACÍOS DE INFORMACIÓN

- Los datos actualizados sobre los desplazamientos individuales son limitados. Este vacío de información limita el análisis de los impactos sobre las personas afectadas y la magnitud del problema.
- No se dispone de información precisa y actualizada sobre la motivación del Gobierno venezolano para apoyar o no a los grupos armados colombianos.
- Faltan datos concretos sobre las necesidades humanitarias de las personas y comunidades que no denuncian las emergencias por las amenazas de los grupos armados.
- No se dispone de información actualizada sobre las medidas de contención impuestas por los grupos armados y su impacto humanitario.

Este trabajo fue financiado por ECHO.

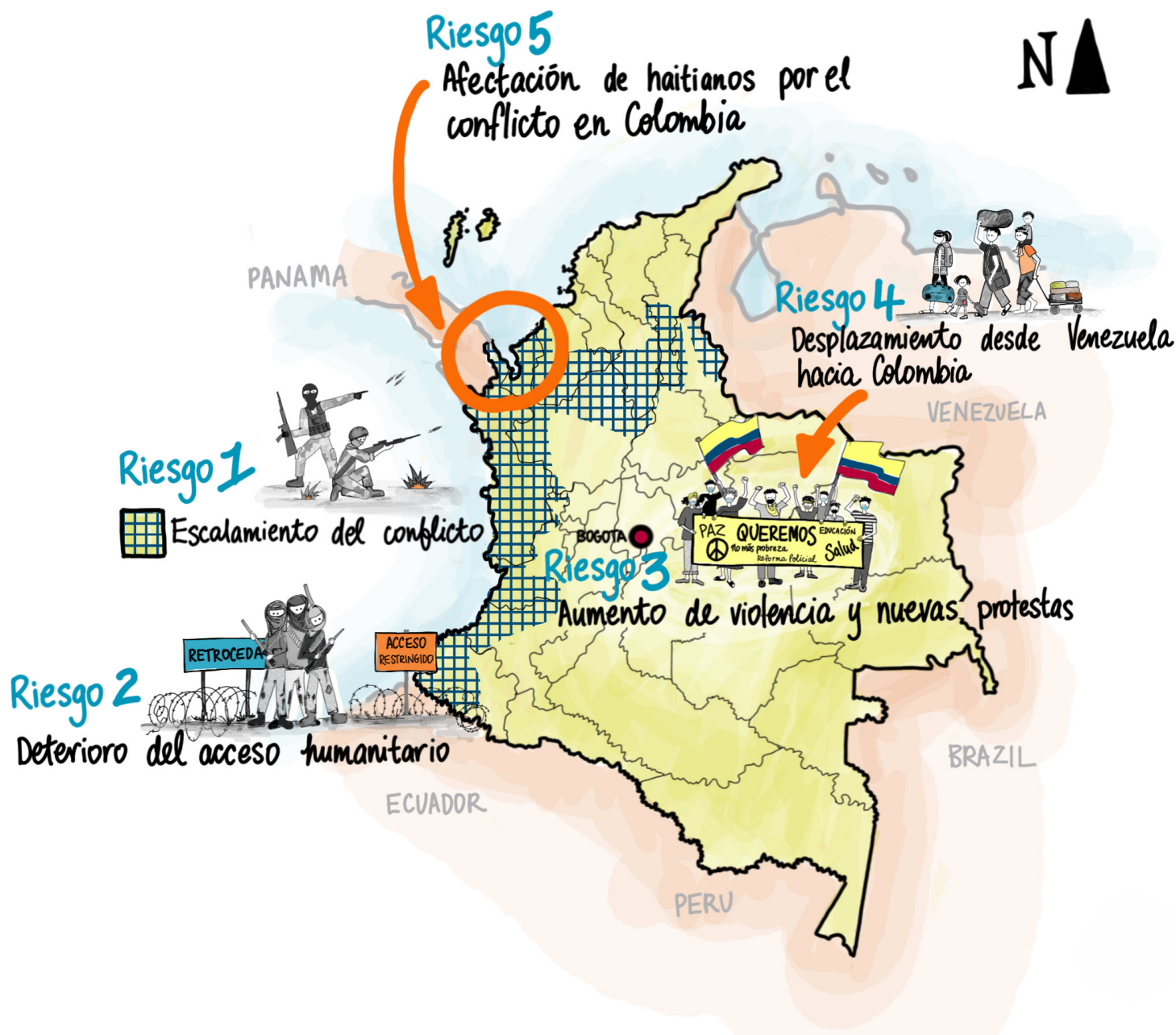


Ilustración por Sandie Walton-Ellery